

Cambio climÃ¡tico y reclutamiento: otro reto para la seguridad en 2022

DescripciÃ³n

default watermark

A pesar de que en la COP 26 Colombia se comprometiÃ³ a que para 2030 va a reducir a cero la deforestaciÃ³n, incluyendo estrategias que buscan disminuir la tala ilegal por parte de grupos armados, hay un tema sobre el que no se estÃ¡ hablando y es clave para entender mejor la relaciÃ³n cada vez mÃ¡s estrecha entre conflicto armado y medio ambiente: el reclutamiento.

Los efectos del cambio climÃ¡tico y de la degradaciÃ³n ambiental (sobre todo la deforestaciÃ³n y la minerÃa ilegal) estÃ¡n llevando a que algunas personas se unan a grupos armados. Por primera vez, Colombia tiene datos que muestran este fenÃ³meno y que sugieren que este tema amerita mÃ¡s investigaciÃ³n y atenciÃ³n en intervenciones de construcciÃ³n de paz.

Los datos vienen de un informe que acaba de publicar la Universidad de las Naciones Unidas en alianza con la FundaciÃ³n Conflict Responses, CORE, para el Proyecto â??Managing Exits from Armed Conflictâ??, MEAC. El informe se basÃ³ en una encuesta entre abril y mayo de 2021 a 2640 personas en 11 municipios: ocho golpeados por el conflicto (MutatÃ¡ y ApartadÃ³ en Antioquia; Caldono y Guapi, en Cauca; San JosÃ© del Guaviare, Guaviare; La Uribe, en Meta; Puerto AsÃs, Putumayo; y San Vicente del CaguÃ¡n, CaquetÃ¡) y tres ciudades (BogotÃ¡, Cali y Villavicencio).

Todos los municipios reportaron desplazamientos causados por el cambio climÃ¡tico, con los municipios rurales reportando a un nivel de 30% este fenÃ³meno. Los municipios con presencia conocida de grupos armados tambiÃ©n reportaron niveles mÃ¡s altos de conflictos por recursos y tierras, como San Vicente del CaguÃ¡n, Caldono, Uribe y San JosÃ© del Guaviare. Todos los municipios informaron de disputas sobre el agua, pero Caldono, MutatÃ¡ y San Vicente del CaguÃ¡n, con el 10-13 % de los encuestados que informaron de tales conflictos, parecÃan ser los mÃ¡s afectados.

Teniendo en cuenta los patrones histÃ³ricos de desplazamientos ademÃ¡s de las disputas por la tierra y otros recursos en Colombia, estos impactos podrÃan indicar que, a medida que el cambio climÃ¡tico empeora y hay menos recursos disponibles, los grupos armados seguirÃ¡n cooptando la tierra, los rÃ-os y otros recursos para actividades generadoras de ingresos como la deforestaciÃ³n y la minerÃa, disminuyendo aÃºn mÃ¡s la capacidad de las comunidades para aprovechar estos recursos por sÃ

mismas y adaptar al cambio climÃ¡tico.

Pero tal vez el dato mÃ¡s impactante â?? y por cierto el que representa una nueva Ã¡rea de atenciÃ³n para los interesados en el cambio climÃ¡tico y la construcciÃ³n de paz en Colombia â?? es que el 13% de los encuestados que reconocieron los efectos del cambio climÃ¡tico en sus comunidades conocÃan a personas que se fueron a grupos armados por dificultades para ganarse la vida a causa del cambio climÃ¡tico y la degradaciÃ³n ambiental. Las zonas rurales registraron los niveles mÃ¡s altos de este vÃ-nculo: el mÃ¡s alto fue Guapi, con el 19%.

En ese municipio caucano -donde tiene injerencia el Frente 30 de las Farc y en menor medida el Frente JosÃ© MarÃa Becerra del ELN- la evidencia de explotaciÃ³n de oro de aluviÃ³n se ha disparado. La crecida comenzÃ³, sobre todo, ad portas de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y ha seguido. SegÃºn datos de 2016 del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Cauca era el departamento donde mÃ¡s aumentÃ³ la explotaciÃ³n de oro frente a la mediciÃ³n que esa misma oficina hizo en 2014 y Guapi, junto a los municipios de BolÃvar y GuachenÃ©, concentraron â??incrementos por encima del 800%â?•, dice el informe.

default watermark

Tanto la disidencia como el ELN se lucran de la minerÃa ilegal allÃ. Una fuente que le hace seguimiento en terreno a este tema y que no puede ser citada porque no es vocera, dijo que, por ejemplo, en los consejos comunitarios del Alto Guapi, RÃo Napi y San Francisco, la disidencia tiene su propia maquinaria y que â??en esos contextos es que comienzan a contratar gente para que trabaje con ellos en eso de la minerÃa y sabemos de casos de gente que asÃ termina siendo reclutada. Sabemos que el reclutamiento acÃ¡ se ha incrementadoâ?•, dijo. â??Pero no tenemos cifras para soportar eso porque asÃ sean menores o mayores de 18 aÃ±os, las familias tienen miedo de denunciarâ?•, agregÃ³.

Volviendo a los datos nacionales las zonas rurales reportaron niveles mÃ¡s altos de reclutamiento relacionados con esta degradaciÃ³n ambiental antrÃ³pica, con niveles reportados de hasta el 28% en ApartadÃ³, Antioquia o 15% en San Vicente del CaguÃ¡n, CaquetÃ¡.

En ApartadÃ³, otra fuente de una organizaciÃ³n comunitaria, dijo que era muy comÃºn, por el aumento en la explotaciÃ³n minera y maderera en la zona, que el Clan del Golfo â??utilice a personas que estÃ¡n vinculadas a esas actividades para que den informaciÃ³n, como si ven EjÃ©rcito y cosas asÃ y por esa vÃa algunos despuÃ©s terminan vinculadosâ?•.

En San Vicente del CaguÃ¡n, por un lado, estÃ¡ la disidencia de Gentil Duarte hacia las Sabanas del YarÃ en lÃmites con Meta y, por otro, la Segunda Marquetalia de IvÃ¡n MÃ¡rquez, en la cordillera. Mientras la Segunda Marquetalia mantiene la misma regulaciÃ³n ambiental de las Farc-EP sobre las juntas de acciÃ³n comunal, con manuales de convivencia en los que fijan multas y castigos para quienes incumplan sus reglas, Duarte sÃ permite la tala y cobra una vacuna por la compra y venta de predios y por cada cabeza de ganado en su zona.

Uno de los efectos no deseados del desarme de las FARC-EP fue que en la AmazonÃa se abriÃ³ la puerta para que terratenientes ganaderos llegaran a la regiÃ³n a comprar tierra mÃ¡s barata y a ocupar baldÃos. Duarte se ha adaptado a este negocio y es justo aquÃ, en el corazÃ³n de este problema, que se enfoca la â??CampaÃ±a Artemisaâ??, contra la deforestaciÃ³n, que naciÃ³ en abril de 2019.

â??Artemisaâ?? consiste en operativos militares dirigidos, en teorÃa, hacia los responsables de la tala ilegal. SegÃºn el Ministerio de Defensa, la militarizaciÃ³n ha resultado efectiva. Las cifras reportadas por el Ministerio muestran que hay 22.300 integrantes de la Fuerza PÃºblica metidos en esta estrategia y a septiembre de 2021 iban 6.156 hectÃ¡reas â??recuperadasâ?•, y 244 operaciones sÃ³lo en Putumayo, CaquetÃ¡ y Guaviare. Sin embargo, la estrategia ha sido criticada en los medios y por las mismas comunidades porque la Fuerza PÃºblica llama â??recuperarâ?• a hacer el operativo, capturar y despuÃ©s salir del territorio, lo que al final no resuelve el problema porque en varios casos la gente regresa a talar.

Pero tambiÃ©n porque, segÃºn los datos de la FiscalÃa, hasta diciembre de 2021, como contÃ³ La Silla VacÃa, de 96 personas capturadas sÃ³lo una habÃa sido imputada por deforestaciÃ³n, lo cual muestra cÃ³mo la estrategia sigue sin dar con los grandes determinadores de la tala. Tampoco ha sido efectiva para su objetivo principal, que era proteger las reservas de bosque y los Parques Nacionales Naturales, que son focos de deforestaciÃ³n.

Aunque durante sus primeros aÃ±os, el gobierno de Duque logrÃ³ reducir la tala en esos focos (pasÃ³ de 21 mil hectÃ¡reas en 2018 a 13 mil en 2019), en 2020 la tala volviÃ³ a crecer un poco mÃ¡s del 2 por ciento.

default watermark

SegÃºn tres presidentes de junta con los que hablamos por aparte, por estas crÃticas la campaÃ±a Artemisa le estÃ¡ permitiendo a Duarte reforzar su discurso contra el Estado y por esa vÃa, convencer a varios de irse con Ã©l. O incluso, ni siquiera tiene que convencerlos.

â??SÃ© del caso de un niÃ±o de diez aÃ±os que se le ofreciÃ³ al grupo porque en uno de esos operativos [Artemisa] se le llevaron a su papÃ¡ y a su mamÃ¡â?•, nos dijo bajo la condiciÃ³n de no citarlo un presidente de una junta de acciÃ³n comunal de una zona donde manda un aliado de Duarte.

â??Militarizar la protecciÃ³n del medio ambiente nos estÃ¡ generando mÃ¡s conflictos que los que tenÃamos antes, cuando estaban las Farcâ?•, dijo, por su lado, otro lÃder social de la zona.

Otros municipios como MutatÃ¡ (con un 21%) en Antioquia o Puerto AsÃs (con el 17%) en Putumayo tambiÃ©n reportaron conocer gente que se va a los grupos armados como consecuencia de la degradaciÃ³n ambiental humana.

La buena noticia es que Duque regresÃ³ al paÃs de la COP26 con un bolsillo lleno para luchar contra la deforestaciÃ³n. Alemania, Noruega y el Reino Unido donaron 33.5 millones de dÃ³lares. A la luz de estos nuevos datos, esta financiaciÃ³n tendrÃ¡ que apuntar en 2022 no sÃ³lo a operativos militares, sino a que el Estado realmente se quede en el territorio y genere confianza para crear acuerdos ambientales sostenibles y que le quiten gasolina al discurso de los grupos armados.

CategorÃa

1. Lo MÃ¡s Destacado 1
2. Publicaciones

Fecha de creaciÃ³n
01/02/2022
Autor

conflictresponses

default watermark